«paz ó del orden público, el Ejecutivo con aprobación del Congreso, y en receso de este, con acuerdo del Consejo de Estado, podrá suspender por un tiempo limitado y por medio de prevenciones generales, las garantías otorgadas por esta constitución, con excepción de las que aseguran la vida del hombre, sin que la suspensión pueda contraerse á determinado individuo.»

La suspensión de garantías que el ejecutivo del Estado puede hacer conforme á la prevención del artículo 81, no puede referirse á las que otorga la constitución federal á los derechos del hombre, porque estas solamente pueden suspenderse por el Presidente de la República, del modo y en los términos que la misma constitución previene.

CAPITULO IX.

De los mexicanos, de los extranjeros y de los ciudadanos mexicanos.

(Artículos del 30 al 98 de la Constitución)

Divide la constitución federal á los habitantes del territorio nacional en mexicanos, y de estos trata en la sección II, tit. I; extranjeros, de quienes trata en la sección III, y ciudadanos mexicanos, de quienes trata en la sección IV. Las constituciones de los Estados, que forman la Federación, establecen, además, la calidad de ciudadanos de cada uno de los Estados.

«Son mexicanos,» dice el artículo 30 de la constitución.

«I. Todos los nacidos dentro ó fuera del territorio de la República, de padres mexicanos,» siguiendo en esta declaración el principio universal por el que los hijos tienen la nacionalidad de los padres.
«II Los extranjeros que se naturalicen conforme á las leys de la Federacion»

La Republica acepta como miembro de su familia á todo hombre que quiera pertenecer á ella. Hay en el mundo millares de hombres desgraciados que necesitan emigrar á paíes extranjeros, y vivir y morir en ellos en busca de paz y de medios de subsistencia. Condenar á esos hombres á ser siempre extranjeros, á germen lejos de la tierra que los vió nacer, por satisfacer sus necesidades, y no ofrecerles el abrigo de una patria, seria verdaderamente cruel y impolitico. El extranjero que quiera ser mexicano puede serlo, sujetándose á lo que prevengan las leyes de la Federacion.

¿Por qué se ha de atender á las de la Federacion y no á las de los Estados? Porque la fraccion XXI del articulo 72 de facultad al Congreso para dictar leyes sobre naturalizacion, colonizacion y ciudadania. Y esta facultad se reservó al Congreso de la Union, porque su uso interesa no á uno ó varios Estados de la Federacion solamente, sino al conjunto de ellos, y esta unidad de intereses pudiera imponer si fuera licito que un Estado exigiera unas condiciones y otro Estado otras diversas para la naturalizacion, colonizacion y ciudadania, y porque no sería conveniente que cada parte de la Federacion pudiera legislar en lo que interesa, importa y afecta al conjunto de partes que forman la Federacion mexicana.

«III Los extranjeros que adquieran bienes raices en la Republica ó tengan hijos mexicanos, siempre que no manifesten la resolucion de conservar su nacionalidad»

Supuse, y con razón el legislador, que el extranjero que adquiere bienes raices ó forma una familia mexicana, manifiesta la intencion de establecerse para siempre en el pais y adquiere en él un interes verdadero, que lo hará amar á la Republica como á su verdadera patria, pero como no es absolutamente imposible, ni aun verdaderamente dificil que no tenga tal intencion, la prevencion constitucional quedó limitada con estas palabras «siempre que no manifesten (los extranjeros) la resolucion de conservar su nacionalidad»
«Son extranjeros (art. 38) los que no posean las calidades determinadas en el art. 30,» que acaban de referirse.
«Es obligación de todo mexicano» (art. 31)
«I. Defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos é intereses de su patria.
«II. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y municipio en que resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.»

La fracción I comprende todos los intereses que pueden llamarse propiamente de patria, diversos de los de ciudadanía.

La fracción II impone el deber de contribuir para los gastos de la patria en sus tres diversos aspectos, de Federación, de Estado y de Municipio, cada uno de los cuales tiene su interés especial para el mexicano.

La contribución ha de ser proporcional y equitativa, con cuya expresión impone la constitución el precepto, aunque indirecto, á los Estados y Municipios de atender siempre á la equidad en la determinación de sus respectivos impuestos, los cuales no deben nunca ser excesivos.

Conforme al artículo 32 «Los mexicanos serán preferidos á los extranjeros, en igualdad de circunstancias, para todos los empleos, cargos ó comisiones de nombramiento de las autoridades, en que no sea indispensable la calidad de ciudadano.»

Previene, además, este artículo que «Se expedirán leyes para mejorar la condición de los mexicanos laboriosos, pidiendo á los que se distingan en cualquiera ciencia ó arte, estimulando al trabajo y fundando colegios y escuelas prácticas de artes y oficios.» Tales prevecciones, que acaso pudiera parecer que corresponden más al órden puramente administrativo que al constitucional, no están fuera de su lugar, supuesto que importan el establecimiento de ciertas ventajas en favor de los mexicanos, cuyo interés debe proteger la patria.

Los extranjeros, conforme al artículo 38, «tienen derecho á las garantías otorgadas en la sección 1a, título 1º de la presente constitución, salvo en todo caso la facultad que el
«Gobierno tiene para expeler al extranjero pernicioso Tiene
nen obligación de contribuir para los gastos públicos, de la
manera que dispongan las leyes, y de obedecer y respetar,
las instituciones, leyes y autoridades del país, sujetándose
á los fallos y sentencias de los tribunales, sin poder intentar
otros recursos que los que las leyes conceden á los mexi-
canos.»

Tienen derecho los extranjeros á las garantías otorgadas
por la constitución, porque ellas son en favor de los derechos
del hombre, pero con una limitación, y esa facultad que tiene
el gobierno para expeler del país al extranjero pernicioso La
República da una fianza hospitalidad á todos los extranjeros
y les brinda con las riquezas del país. Si en cambio de esa
hospitalidad tan generosa al extranjero, este es pernicioso para
el país, demasiado generosa también es la República cayéndose
á expelerlo del territorio nacional. Esta expulsión es el casti-
go de la ingratitude, no obstante que podían castigálos malos
hechos del extranjero, sin que nadie pudiesen disputar á la
República su justicia y su derecho La constitución se ha con-
formado, además, en este punto con la práctica universalmen-
te establecida

¿Quién califica al extranjero de pernicioso, y ejerce la fa-
cultad de expulsarlo? El Gobierno, es decir, el Ejecutivo, que
exerce el poder administrativo, en quien se supone, con funda-
mento, el conocimiento de los hechos y de los individuos, y á
quien se confía el cuidado de los intereses sociales. Un extran-
jero que se ingiera en las cuestiones políticas del país, que fo-
menta los elementos de desorden que pueda haber, que en vez
de trabar y de ocuparse en un trabajo honesto, se dedica á ex-
plotaciones inmorales, á sorprender la buena fé de los nacio-
nales, y á otras industrias ilegítimas, no debe ser tolerado. Y
por desgracia no han faltado ejemplos de esta clase

Parece innecesario demostrar que los extranjeros tienen obli-
gación de contribuir á los gastos públicos, supuesto que re-
ben los beneficios y la seguridad que se pagan con esos gastos.
Del mismo modo sería innecesario demostrar que deben obede-
cer y respetar las instituciones, leyes y autoridades del país, si no fuera por que muchos de los extranjeros que han venido al país se han queido juzgar superiores á las leyes y á los hombres de esta República, que aparecía débil y atrasada en la civilización porque no era bastante conocida, si no fuera por que esas absurdas pretensiones han sido apoyadas por algunos de los representantes de sus gobiernos respectivos, hasta llegar a la pretensión de que los fallos y sentencias de los tribunales no les fuesen obligatorios.

Abusos de esta especie y las consideraciones exageradas que gobiernos mexicanos tuvieron para con muchos extranjeros, juzgando con enemó á la República mas débil de lo que puede ser en realidad, llegaron á ser tan frecuentes y á veces tan notables, que en el concepto popular se estimaba preferible la condición de extranjero á la de mexicano.

El artículo constitucional que determina la condición de los extranjeros, ha destruido el derecho de extranjería que se ha pretendido en otros tiempos fundar en la República para sustituirse á todo lo que pudiera ser gravoso para los intereses de algunos de los extranjeros y que especialmente se hacía valer en cuestiones relativas á la administración pública, y en particular á negocios de hacienda. No es este el lugar propio para referir todas las pretensiones exageradas que se han verificado en favor de extranjeros, pero hay ejemplos muy conocidos de ellas que justifican plenamente la disposición constitucional que previene que los extranjeros no pueden intentar "otros recursos que los que las leyes conceden á los mexicanos". Y aun sin el fundamento referido es justo el precepto constitucional, porque sería harto repugnante que los extranjeros fueran preferidos á los propios ó de mejor condición que estos.

"Son ciudadanos de la República, dice el artículo 84, todos los que tienen la calidad de ser mexicanos, reunan además las siguientes.

"1. Haber cumplido diez y ocho años siendo casados, ó vencido si no lo son."
«II Tener un modo honesto de vivir»

Es decir, que el mexicano lo es desde su nacimiento y tenga ó no modo de vivir el ciudadano ha de tener una edad determinada y un modo honesto de adquirir la subsistencia.

La simple calidad de mexicano produce deberes para con la patria y de preferencia con respecto á los extranjeros. La calidad de ciudadano de la República produce derechos y obligaciones.

«Son prerrogativas del ciudadano,» según el artículo 35

«II Votar en las elecciones populares

«II Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo ó comisión, tomando las calidades que la ley establece.

En estas dos fracciones del artículo constitucional se establece la mas perfecta igualdad entre todos los ciudadanos, base de la democracia y de las instituciones, y se resuelve la cuestión sobre derecho electoral que ha agitado á otros países y ocupado á muchos hombres consagrados á los estudios políticos.

El derecho de votar, es decir de elegir, se ha restringido en algunos países, tomando por base la posesión de un capital determinado ó el pago del impuesto. En esas circunstancias se ha pretendido hallar el acierto electoral y la conveniencia de no confiar el ejercicio de ese derecho sino á personas verdaderamente interesadas en el acierto de la elección y en la prosperidad del país, juzgando que quienes tienen un manifiesto interés son aquellos que tienen una propiedad.

¿El derecho de votar es un derecho natural ó es un cargo político? Varias y diversas opiniones han expuesto respetables escritores sobre este punto, pero buscando la sencillez de los principios, parece fuera de duda que el derecho de votar es natural. Si la naturaleza del hombre lo lleva á la sociabilidad, si obedeciendo esa necesidad orgánica el hombre se asocia con otros hombres y por su propia conveniencia establece un gobierno, es indispensable que tenga el derecho de elegir á los individuos que han de formar el gobierno. Sin recuerdo
á las teorías del Contrato social, cuyas fórmulas serían puramente imaginarias, bien se puede creer, porque es la verdad, que á todos los miembros de una sociedad les interesa el gobierno que se encarga de ella. La inviolabilidad de los derechos del hombre exigirá la constante y directa acción del pueblo para ser efectiva, si todos los ciudadanos no tuvieren el derecho de elegir á los gobernantes

Establecido como fundamental el principio que la constitución federal sanciona de que los poderes públicos son delegados y de que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, no puedo concebirme cómo un despojado á una parte del pueblo de la soberanía y de la consiguiente facultad de delegar el poder público y de restringirlo, pueda negarse á algunos de los ciudadanos, sea cual fuere el pretexto, el derecho de voto. Tampoco puedo concebirme cómo sin limitar la soberanía del pueblo se pueda reducir á determinadas personas el derecho de ser votadas

En nuestro derecho común hay un principio que dice «Lo que á todos interesa, por todos debe ser tratado» Nada más justo que la aplicación de este precepto á las cuestiones políticas, al derecho de sufragio activo y pasivo. Si el principio es justo, rehusar su aplicación en cuanto al derecho de votar sería convenir en que este derecho no se ajusta á los preceptos de la justicia, en que la política repele las ideas de justicia y de derecho, en que la sociedad implica una violación del derecho

Aunque fundados en razones de diversa especie á las anteriormente expuestas, escritores hay que no solo creen en la justicia del sufragio universal, sino que estiman que conforme á ella no debe privarse á la mujer del derecho de votar.

¿Sería esto conveniente? No es esta la ocasión más propia para estudiar este punto, supuesto que el precepto constitucional sanciona el derecho de votar y de ser votado solamente como una privilegativa de los ciudadanos

Perú si es un derecho natural el que se establece en esa privilegativa, ¿por qué no se concede á todos los habitantes del
país? ¿Por qué no se incluye entre los derechos del hombre? Porque el ejercicio de este derecho natural no interesa más que a los miembros de cada sociedad, porque es un derecho natural con relación a la sociedad de que forma parte el hombre.

Son también prerrogativas del ciudadano.

1. Asociarse para tratar los asuntos políticos del país.
2. Tomar las armas en el ejército y en la guardia nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones.
3. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

La tercera fracción del artículo constitucional es el complemento del artículo 8º de la constitución, que da garantías al derecho de asociación y de reunión pacífica, restringiendo su ejercicio en cuanto a asuntos políticos solamente en favor de los ciudadanos, quienes son los verdaderos y directamente interesados en las cuestiones políticas de su patria.

Este interés es el fundamento de la fracción IV, y estableciendo el derecho de tomar las armas para defender a la República y a las instituciones como una prerrogativa del ciudadano, resuelve la constitución indirectamente que no puede haber en la República un ejército extranjero, aunque sea con el carácter de nacional, cuya existencia sea siempre peligrosa para el país. Esta prerrogativa ennoblecce verdaderamente el servicio de las armas, porque lo quita el carácter de mercenario y lo reviste con la respetabilidad de la ciudadanía.

La fracción V es el complemento del artículo 8º de la constitución, que garantiza el derecho de petición, como uno de los que deben ser respetados por las leyes y las autoridades.

1. Son obligaciones del ciudadano de la República (art. 36)
2. Inscribirse en el padrón de su municipalidad, manifestando la propiedad que tiene, o la industria, profesión o trabajo de que subsiste.
3. Alzarse en la guardia nacional.
4. Votar en las elecciones populares, en el Distrito que le corresponda.
«IV Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación, que en ningún caso serán gratuitos.»

La fracción I es una disposición de orden, indispensable para la buena administración pública, que no puede existir sin el conocimiento de las personas y sus propiedades.

La fracción II establece como una obligación lo que en el artículo anterior se expresa como una prerrogativa del ciudadano. Es un derecho el de tomar las armas en la guardia nacional es un deber inscribirse en los padrones de ella. Si es un deber del mexicano defender los intereses de su patria, natural es que el ciudadano, que disfruta de ciertas prerrogativas, tenga el mismo deber y lo cumpla alistándose en la guardia nacional, que es la institución, en virtud de la cual el pueblo tiene las armas para defender su propia libertad y sus derechos, ya en lo que toca a la sociedad, ya en lo que toca al individuo. Si este deber no existiera, una de las cargas políticas y sociales más graves posaría solamente sobre algunos ciudadanos, librándose de ellas los ególatas y rompiéndose la igualdad de derechos y obligaciones, que son la base de las instituciones de la sociedad mexicana.

Como un deber también se impone al ciudadano lo que en el artículo anterior (35) se expresa como una prerrogativa votar en las elecciones populares. La constitución, al imponer este deber que antés ha reconocido como un derecho, se fundamenta en las teorías indicadas anteriormente, según una de las cuales el derecho de votar es natural, y según otra, es un cargo político. El fundamento del artículo constitucional en esta fracción es muy aceptado el derecho de votar es natural el ejercicio de este derecho es un cargo político, y por lo mismo es un deber.

Como no sería conveniente que el mexicano que se naturaliza en país extranjero, haciéndose extraño á su patria, conservase la calidad de ciudadano en ella, y como parece manifiestase tal intención al servir al gobierno de otro país ó admitir condecoraciones sin el permiso de la República, el artículo 37 declara que «La calidad de ciudadano se puede
La naturalización en país extranjero

La servir oficialmente al gobierno de otro país, o admitir de él condecoraciones, títulos o funciones, sin previa licencia del Congreso federal. Exceptúanse los títulos literarios, científicos y humanitarios que pueden aceptarse libremente, porque las ciencias, las letras y los servicios a la humanidad no pertenecen exclusivamente a una nación, sino que son del mundo todo, y interesan a todo el mundo también.

El artículo 38 dispone que «La ley fijará los casos y la forma en que se pienden ó suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación».

CAPÍTULO X.

De la ciudadanía en los Estados.

(CONSTITUCIONES PARTICULARES)

Las cualidades exigidas para obtener la ciudadanía en los Estados, son las que demarcan sus respectivas constituciones

La de Campeche exige las siguientes: Ser campechano haber cumplido diez y ocho años, tener modo honesto de vivir.

La de Veracruz: Ser veracruzano, o mexicano de nacimiento, o naturalizado con arreglo a las leyes federales, vecindado en el Estado, lo cual se entiende hecho por inscribirse en el padrón municipal o comenzar a ejercer algún giro, profesión o industria de que vivir.

La de Zacatecas declara ciudadanos á los habitantes del Estado que residen habitualmente en él, y á los ciudadanos mexicanos conforme a lo dispuesto por la constitución federal.

La de Yucatán declara ciudadanos á los que siendo yucate-
cos, tengan las condiciones que exige la constitución federal para la ciudadanía

La de Guanajuato declara ciudadanos á los guanajuatenses que tengan las condiciones exigidas por la constitución federal.

La de Tabasco declara que «son ciudadanos del Estado todos los que tengan las cualidades que se requieren para ser mexicano».

La de Chihuahua declara ciudadanos á los chihuahuenses que tengan las cualidades de ciudadano mexicano.

La de San Luis Potosí exige los mismos requisitos á los potosinos.

La de México exige para la ciudadanía la edad de diez y ocho años, siendo casado el hombre, y de veinticuatro si no lo fuere, u obtener del congreso del Estado carta de ciudadanía.

La de Guadalupe declara que «son ciudadanos los que tengan el requisito de vecindad (lo cual se adquiere por un año de residencia fija), y siendo mayores de diez y ocho años, ejerzan una profesión, arte, oficio ó industria útil y honesta. Lo son también los nacionales y extranjeros á quienes el Congreso conceda carta de ciudadanía» — Parece que deberá entenderse este artículo, en lo relativo á extranjeros, siempre que hayan sido naturalizados conforme á las leyes de la Federación.

La constitución del Estado de Colima requiere en los colonos, para ser ciudadanos del Estado, las mismas cualidades que la constitución general exige para ser ciudadano mexicano.

La de Durango declara que son ciudadanos duranguenses los nacidos en el Estado, y los mexicanos y extranjeros naturalizados que permanezcan por dos años en el Estado y adquieran bienes raíces en él, manifestando á la autoridad la voluntad de vivir en su territorio. La edad exigida es la de diez y seis años.

La constitución de Puebla declara que son ciudadanos poblano los comprendidos en los artículos 7º y 8º de dicha constitución, que dice «7º Son poblanos los nacidos en el territ...
torio del Estado los mexicanos de nacimiento y los extranjeros naturalizados con arreglo a las leyes, desde el día que se avendaren en el Estado —8° El Estado acoge en su territorio a todo individuo que quiera avenizarse en él.

La constitución de Sonora declara que son ciudadanos los sonoences que tienen las cualidades que para la ciudadanía exige la constitución federal.

La de Tlaxcala exige para la ciudadanía las mismas condiciones que a los habitantes del Estado, y son habitantes los nacidos en el Estado los mexicanos que residan en él por dos años los mexicanos por solo el hecho de adquirir bienes raíces o comenzar a ejercer alguna profesión, &c., manifestando a la autoridad su voluntad de ser vecinos en el territorio, y los extranjeros, según las leyes federales, que se hallen en los casos precedentes.

La constitución de Oaxaca, no exigiendo cualidades especiales para la ciudadanía del Estado, reconoce la de los ciudadanos mexicanos, quienes pueden ser electos para todos los cargos de elección popular en el Estado, teniendo los requisitos, de edad, vecindad y profesión que exigen diversos artículos de la constitución para la elección de diputados, gobernador y magistrados.

La constitución de Michoacan declara ciudadanos del Estado a los michoacanos que tengan los requisitos previstos por la constitución general.

La del Estado de Hidalgo declara que son ciudadanos del Estado el ciudadano mexicano, natural ó vecino del Estado, mayor de diez y ocho años siendo casado y de venturoso si no lo fuese, y declara natural del Estado al nacido en la comprensión de su territorio al nacido accidentalmente fuera de su territorio, de padres avenizados en él —Son vecinos del Estado todos los que tengan un año de residencia en él y aquellos que aunque no tuvieron residencia por ese término manifiesten expresamente ante la autoridad municipal su resolución de avenizarse, inscribiéndose en el padrón respectivo.

La constitución de Jalisco declara que «el Estado garantiza
á todos sus habitantes el goce de los derechos del hombre y del ciudadano mexicano, que están declarados en la constitución federal, así como el de los que se consignan en esta, con las restricciones que en ella misma se expresan, y son, para votar sea ciudadano mexicano, estar inscrito en el registro civil, saber leer y escribir, menos cuando se trate de la elección de comisarios municipales, no haber sido condenado por ninguno de los delitos infamantes que designará una ley secundaria, no tener causa criminal pendiente, ni ser deudor calificado del estado, para ser votado, tener residencia en el Estado por lo menos de dos años, y no ser que se trate de empleos facultativos, no pertenecer al estado eclesiástico, ni tampoco, si se trata de alguno de los empleos de que habla la constitución del Estado, á la milicia permanente ó activa.

La razón de estas dos restricciones es acaso que no sean convenientes dar entrada en los cargos públicos ó los eclesiásticos por la influencia que estos pudieran ejercer en favor de determinado culto, cuando la constitución federal no ha dado la preferencia á ninguno, y en cuanto á los militares, la consideración de que los permanentes y activos son soldados de la Federación y sujetos á las órdenes del Gobierno federal, y acaso más por este que por el Estado tendrían intereses.

Los derechos otorgados por las constituciones de los Estados á sus respectivos ciudadanos, se expresan en seguida, y no son asunto de un estudio especial en cuanto á sus fundaméntos, por ser casi todos los mismos que la constitución federal otorga á los ciudadanos mexicanos.

En Campeche los mismos otorgados á los ciudadanos mexicanos, y además no perder la vecindad por salir fuera del Estado para desempeñar encargos de elección popular ó comisiones del Gobierno nacional ó del Estado, siempre que concluido el desempeño vuelva el ciudadano campechano á su vecindad.
En Yucatán, los mismos que en Campeche.

En Veracruz los derechos de ciudadano mexicano, con la condición en cuanto al ejercicio del de reunirse para tratar de los asuntos públicos, de dar previo aviso a la autoridad local.

En Guanajuato, Tabasco, Chihuahua, San Luis Potosí, México, Guanajuato, Colima, Puebla, Sonora, Michoacán y Hidalgo los mismos derechos que el ciudadano mexicano.

En Tlaxcala, además de los derechos de ciudadano mexicano, se otorga el de uso de las armas y el de no ser molestado en su persona, familia, domicilio y papales sino por la autoridad respectiva, «y con causa bastante motivada.» El derecho de reunión se ejerce previo aviso a la autoridad local.

En todos los Estados se otorga a los ciudadanos el derecho de votar y ser votados en las elecciones populares. En algunos de los Estados en que se concede la ciudadanía del Estado a todos los ciudadanos mexicanos, o en que no se establece diferencia alguna, el derecho electoral se otorga a los habitantes. Y en ningún Estado se ha restringido el derecho electoral por condición alguna que pague de él a ningún ciudadano, de conformidad con los principios establecidos en la constitución federal.

Las obligaciones de los ciudadanos en sus respectivos Estados son:

En Campeche las mismas que la constitución federal impone a los ciudadanos mexicanos, y además servir los cargos de elección popular del Estado servir en los jurados cuando llamo la ley servir los encargos municipales.

En Yucatán las mismas que en Campeche, y además observar fielmente las leyes y respetar a las autoridades legítimamente constituidas, y defender a la patria.

En Veracruz y en Puebla además de las obligaciones del ciudadano, impone al Estado la de prestar a las autoridades el auxilio que pidan con arreglo a las leyes, y contribuir para los gastos públicos.
En Guanajuato, en Tabasco, en Chihuahua, en San Luis Potosí, en México, en Colima, en Durango, en Sonora, en Tlaxcala, en Michoacán y en Hidalgo las mismas que impone la constitución federal

En Guanajuato además de votar en las elecciones e inscribirse en la guardia nacional, desempeñar los cargos concejiles y ocurrir al registro civil para todos los actos cuya inscripción se ha prevenido por las leyes respectivas

La ciudadanía se pierde en los respectivos Estados

En Campeche por las mismas causas que determina la constitución federal para que se pierda la ciudadanía mexicana, y además por traición a la nación del Estado y por quebrada fraudulenta

Se suspende el ejercicio del derecho de ciudadanía por no tener modo honesto de vivir por estar procesado criminalmente por rehúsarse a servir sin causa justa los cargos de elección popular y por no estar alzado, sin justa causa, en la guardia nacional del Estado

En Yucatán se pierde la ciudadanía por las mismas causas que en Campeche, y además por sentencia que imponga pena infamante —La suspensión es por las mismas causas que en el Estado de Campeche

En Veracruz se pierde la ciudadanía por las causas expresadas en la constitución federal, y además por residir cinco años en país extranjero sin licencia del Gobierno, por declaración de deuda fraudulenta a los caudales públicos o municipales, y por sentencia con que se imponga pena afluente o infamante

Se suspende la ciudadanía por faltar a las obligaciones impuestas por la constitución del Estado por incapacidad física o moral por causa criminal desde la fecha del auto de formal prisión por morosidad calificada en el pago de deudas a la
hacienda pública ó municipal por conducta notoriamente viciada.

En Guanajuato se suspenden los derechos de ciudadanía durante la formación de un proceso criminal, desde que se motive la prisión durante la extinción de una condena ó pena correcional por manifestar oposición á la constitución general ó á la particular del Estado, ya sea por medio de actos prohibidos por ellas, ó omitiendo con culpa los que ellas prescriben.

En Tabasco «se suspenden ó pierden los derechos de ciudadanía tabasqueña, por las mismas causas que se pierden ó suspenden los de mexicano, conforme á la constitución general, y además por hallarse comprendidos en la restricción del art. 5º de esta constitución» —El art. 5º, dice «Son ciudadanos del Estado, todos los que tengan las cualidades que se requieren para ser mexicano, perdiéndose la ciudadanía siempre que en el término de cinco años no sepan leer ni escribir».

En Chihuahua, en Guerra y en Sonora se suspenden y pierden los derechos de ciudadanía, en los mismos casos que determina la constitución federal, exigiéndose la declaración de autoridad competente, en los términos que prevenga la ley.

En San Luis se suspenden los derechos del ciudadano por estar procesado criminalmente por incapacidad moral, pública ó comprobada por deuda á los caudales públicos fiados á su manejo, precediendo el requerimiento de pago por ser ébrio consuetudinario, vago ó tahum habitual por quehbra fraudulenta justificada por no servir los cargos de elección popular por estar extinguiendo condena impuesta por los tribunales.

Se pierde la ciudadanía por condenación á presidio por delito común, y por perder la calidad de mexicano según la constitución federal.

En México se suspenden los derechos del ciudadano por proceso criminal, por hallarse entregado de administrar sus bienes por quehbra fraudulenta declarada por la autoridad judicial por ser vago mal entretiendo, ébrio ó tahum de profesión por no desempeñar los cargos de elección popular por
hallarse extinguiendo una pena corporis afflictiva, y por no saber leer ni escribir, desde el año de 1870 en adelante.

En Guanajuato se suspenden los derechos del ciudadano por incapacidad física ó moral declarada judicialmente por no tener modo honesto de vivir por hallarse procesado criminalmente, y por no saber leer y escribir, desde el año de 1865 en adelante.

La ciudadanía del Estado se pierde por las mismas causas que la mexicana.

En Durango se pierden los derechos de ciudadano por naturalizarse ó residir por cinco años, sin licencia del Gobierno, en país extranjero por recibir títulos, condecoraciones ó empleos de otra nación por sentencia que condene á pena inframante por haber atentado contra la forma de Gobierno establecida, aun cuando haya recibido indulto de la pena que se aplicase.

Quedan privados de los mismos derechos y de acción en juicio civil, los que no se inscribieren en la Guardia Nacional ó paguen su pensión.

Se suspenden los derechos por no servir los cargos de elección popular por deuda o quiebra ó los caudales públicos, con fraude, dol o mala vecindad por la condición de vago, declarada judicialmente, y por hallarse procesado criminalmente.

En Puebla se suspenden por incapacidad absoluta, física ó moral por falta, sin causa justificada, á las obligaciones impuestas por las constituciones general y particular por conducta enteramente viciada por proceso criminal por no saber leer ni escribir, desde el año de 1870 en adelante.

Se pierde la ciudadanía por admitir nombramiento de gobierno extranjero por tomar las armas contra la independencia nacional, la constitución general ó la particular por naturalización en el extranjero por residir más de cinco años fuera del Estado sin permiso del gobierno por deuda yaudelenta ó los caudales públicos, incluso los municipales por sentencia que condene á pena inframante.
En Sonora se suspende la ciudadanía durante un proceso criminal durante la extinción de una condena, y por ausencia en otro Estado.

En Tlaxcala se suspenden los derechos de ciudadano por incapacidad moral, legalmente justificada por la condición de vago; o no tener modo honesto de vivir por conducta notoriamente viciada, por el auto de formal prisión por morosidad calificada en el pago de contribuciones, por rehusarse a servir los cargos de elección popular.

Se pierde por traición a la patria por admitir empleos o concesiones de gobierno extranjero, sin licencia por naturalización en país extranjero por quiebra fraudulenta por sentencia en que se imponga pena infamante.

En Michoacán se pierden los derechos de ciudadano por haber sido condenado en juicio a sufrir pena de presidio a obras públicas, y por quiebra fraudulenta, calificada en juicio.

Se suspende por incapacidad moral pública o comprobada, por ser deudor a los caudales públicos confiados a su manejo, precediendo requerimiento de pago por ser énico, vago o mala fe, calificado legalmente, y por haber sido condenado a sufrir pena de prisión.

En Hidalgo se suspenden los derechos de ciudadano, desde el auto de formal prisión por condena a pena corporal mientras se extingue por rehusarse a servir los cargos de elección popular, durante el tiempo que debiera desempeñarlos por aceptar empleos, &c., de gobierno extranjero.

Se pierden los derechos por perder la calidad de ciudadano mexicano por sentencia que condene a inutilidad perpetua para obtener cargos o empleos públicos por hacerse ciudadano de otro Estado y por sublevación contra las instituciones o autoridades constitucionales del Estado.